

PAZ Y SEGURIDAD

LA PAZ TOTAL EN EL CARIBE: GOBERNANZAS ARMADAS Y POLITIZACIÓN ACELERADA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Luis Fernando Trejos / Reynell Badillo Sarmiento

Febrero de 2024



Más allá de entender sus impactos humanitarios, el artículo se concentra en los incentivos que la Paz total ha creado en los grupos armados y las respuestas de estos en la región Caribe.



Los indicadores de la violencia, útiles para capturar algunos efectos de la Paz total, no permiten apreciar otras tendencias relacionadas con procesos más locales, como el fortalecimiento de las gobernanzas armadas en algunas subregiones.



La Paz total, sin proponérselo, ha generado incentivos para que los grupos armados en la región incrementen sus apuestas más “políticas”.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	CONTEXTO	6
	2.1 La herencia de la administración Duque en el Caribe: conflictos y gobernanzas armadas.....	6
	2.2 ¿Cómo interpretar los indicadores de violencia en Colombia?	7
3	LAS GOBERNANZAS ARMADAS DEL CARIBE	9
	3.1 La troncal del Caribe, vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta	10
	3.2 Sur del Cesar	10
	3.3 Sur de Córdoba	11
	3.4 Montes de María	11
4	INCENTIVOS DE LA PAZ TOTAL	13
	4.1 Violencia horizontal	13
	4.2 Gobernanzas armadas	14
	4.3 Politización	15
5	CONCLUSIONES	17
6	RECOMENDACIONES	18
	REFERENCIAS	19
	ANEXOS MAPAS	22
	ANEXOS TABLAS	27

1

INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Gustavo Petro (2022-) se propuso desactivar una gran parte de los circuitos de violencia armada activos en varias regiones del país. Para eso, formuló e implementa una política que ha llamado la Paz total, consistente en iniciar procesos simultáneos de negociación y de sometimiento a la justicia para desmovilizar grupos armados de distinta naturaleza y capacidades criminales.

Hay varias lecturas sobre los efectos que la Paz total ha tenido en la violencia derivada del conflicto armado. Por un lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2023) muestra que varios indicadores se han reducido, como, por ejemplo, los combates entre la fuerza pública y los grupos armados, los desplazamientos forzados y los confinamientos. Por otro, en el mismo reporte es evidente que otros indicadores o permanecen iguales (combates entre grupos armados) o se incrementaron: los secuestros y la extorsión. Aunque atribuir causalidad a la Paz total es una tarea difícil, los indicadores muestran que este es un escenario complejo en el que numerosos intereses parecen estarse moviendo paralelamente.

Más allá de sus impactos humanitarios, en este artículo nos concentramos en los incentivos que la Paz total ha creado en los grupos armados y en sus respuestas en la región Caribe. Una región de interés particular porque en ella conviven expresiones de violencia muy distintas, desde la presencia histórica de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de los departamentos de Bolívar y Cesar, hasta un control territorial casi exclusivo de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Córdoba y los Montes de María, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Nuestro argumento está dividido en tres partes. Primero, mostramos que la Paz total incentiva a los grupos armados a expandir sus zonas de control territorial. Los ceses al fuego únicamente se centran en la violencia entre el Estado y los grupos armados, que llamamos violencia ascendente. Con esto, se descuida la posibilidad de que, al librarse de un frente de batalla con el Estado, los grupos armados aprovechen ese momento de mayores capacidades disponibles para desafiar a sus rivales, lo que produciría mayor o igual violencia entre ellos (violencia horizontal).

Segundo, mostramos que los indicadores de la violencia, aunque útiles para capturar algunos efectos de la Paz total, no permiten apreciar otras tendencias relacionadas con procesos más locales, como el fortalecimiento de las gobernanzas armadas en algunas subregiones. En consecuencia, aunque la reducción inmediata de los impactos humanitarios es un alivio importante para las comunidades en zonas de guerra, concentrarse solo en eso puede tener efectos perversos a corto y largo plazo. A corto plazo, lleva a los grupos a desarrollar violencias más cotidianas e imperceptibles en los indicadores, como el control de la vida privada o el incremento de la vigilancia en las comunidades. A largo plazo, puede solidificar el control territorial de los grupos armados en estos territorios y apalancar las gobernanzas armadas que ya estaban en desarrollo.

Tercero, mostramos que la Paz total ha generado, sin ser su intención, incentivos para que los grupos armados en la región incrementen sus apuestas más “políticas”. Lo cual tiene dos consecuencias importantes. La primera es que pone trabas a la idea del sometimiento que el gobierno tiene planteada para ellos. Estos grupos han expresado abiertamente su pretensión de ser reconocidos como actores políticos y pueden tener muy pocos incen-

tivos para aceptar cualquier otra posición. La segunda consecuencia es que esto pone en mayor riesgo a los civiles en estas zonas, porque para legitimar ese carácter político los grupos armados tienen más incentivos para instrumentalizarlos. Esto limita la posibilidad de que los civiles se asuman como neutrales en territorios de guerra y los obliga a mostrar simpatías para que los grupos armados no los consideren desleales o enemigos.

A continuación presentamos el contexto actual de la violencia en la región Caribe. Allí hacemos un mapeo de los

grupos armados presentes en cada subregión y exponemos algunas ideas sobre cómo leer los indicadores de violencia para no subsumir diferentes escenarios en lecturas unificadas. Luego, cómo esos grupos desarrollan diversas formas de gobernanzas rebeldes y criminales en las zonas que dominan. Finalmente, ilustramos cada una de las partes de nuestro argumento con casos de la región. En la última sección planteamos brevemente algunas recomendaciones para la política de Paz total de cara a la evidencia disponible en el Caribe colombiano.

2

CONTEXTO

2.1 LA HERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DUQUE EN EL CARIBE: CONFLICTOS Y GOBERNANZAS ARMADAS

Al finalizar la administración del presidente Iván Duque (2018-2022), en el Caribe colombiano había cinco subregiones con conflictos armados activos¹: el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), el sur del Cesar y Montes de María. A continuación, hacemos una breve contextualización de cada uno.

- ♦ *Sur de Bolívar*². Después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), en el sur de Bolívar permanecieron dos grupos armados: el ELN y las AGC, que llegaron a un acuerdo de no agresión, por lo que se dividieron el

control territorial. Ese orden territorial caracterizado por la presencia de diferentes grupos armados, pero al tiempo por la ausencia de violencia entre ellos, lo denominamos paz mafiosa³. Desde 2021, ese orden territorial se alteró por la llegada de una estructura del Estado Mayor Central (EMC) que se identificó como el frente 37. Posteriormente, el ELN y el EMC se aliaron para resistir la expansión de las AGC en la región, una alianza que se rompió en 2023⁴.

- ♦ *Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta*⁵. La desmovilización de las Farc-EP no alteró significativamente el escenario de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, puesto que el grupo armado conocido entonces como los Pachencia⁶ tenía control territorial hegemónico de esta zona. Sin embargo, desde 2018 las AGC y las ACSN se enfrentan por el control de la ciudad de Santa Marta y de la Troncal del Caribe, ubicada en la vertiente norte de la Sierra.

1 Entendemos de forma muy general a un conflicto armado como aquel en el cual un grupo armado con cierta capacidad de organización ejerce algún nivel de control territorial y presencia armada permanente. Los conflictos armados no necesariamente implican altos niveles de violencia: en realidad, debido a órdenes políticos convenientes tanto para el Estado como para los grupos armados no estatales, estos pueden tener pocos niveles de confrontación e incluso colaboración activa o pasiva (Staniland, 2012). En Trejos et al. (2021) se encuentra una mirada más extensiva sobre nuestra definición de esos conflictos subnacionales.

2 De acuerdo con los municipios priorizados para los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), esta subregión comprende los siguientes municipios: San Pablo, Cantagallo, Simití, Arenal, Santa Rosa del Sur y Morales (véase mapa 1 en el anexo 1, página 22). Estos son los más afectados por el conflicto. No obstante, tanto en esta como en las demás subregiones, los municipios cercanos también suelen tener manifestaciones de violencia derivada del conflicto.

3 En Trejos, Bravo y Badillo (2021a) ampliamos esa definición.

4 El libro *Arrasamiento y control paramilitar en el Sur de Bolívar y Santander. Bloque Central Bolívar: origen y consolidación*. Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), es útil para tener un mejor contexto de la historia de la violencia en esta subregión.

5 Subregión conformada por las zonas rurales de los municipios Ciénaga y Santa Marta (Magdalena) y Dibulla y Riohacha (La Guajira) (véase mapa 2 en el anexo 1, página 23).

6 Grupo armado luego renombrado como ACSN.

- ♦ *Sur del Cesar*⁷. Allí el ELN ha sostenido una presencia histórica al menos desde la década de los sesenta. El conflicto en el sur del Cesar no es entonces entre grupos armados, sino entre el frente guerrillero Camilo Torres Restrepo y la compañía Capitán Francisco Bosio (ambos del ELN) contra la Fuerza Pública. Desde el 3 de agosto de 2023 hay un cese al fuego bilateral y temporal entre el Estado y esa guerrilla.
- ♦ *Sur de Córdoba*⁸. Antes de la desmovilización de las Farc-EP, en el sur de Córdoba esta guerrilla y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tenían cierto nivel de colaboración. Por tanto, la salida de las Farc-EP del territorio le permitió a las AGC consolidar su control casi hegemónico. Entre 2018 y 2021 esta hegemonía se perdió debido a la presencia de los Caparros (autodenominados frente Virgilio Peralta Arenas), lo que incrementó mucho los niveles de violencia. Desde que los Caparros fueron prácticamente desarticulados y expulsados del territorio, las AGC gozan de un dominio territorial casi total.
- ♦ *Montes de María*⁹. Incluso antes de la desmovilización de las Farc-EP, esta subregión fue considerada un experimento/laboratorio de paz, debido a que las comunidades lograron procesos organizativos locales muy exitosos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022). Sin embargo, desde 2018, y cada vez con mayor intensidad, las AGC reactivaron su presencia, principalmente en municipios como María La Baja, El Carmen de Bolívar y San Onofre, donde gozan de un control exclusivo del territorio¹⁰.

Si bien, como es obvio, estos conflictos no iniciaron con la administración Duque, durante sus años de gobierno hubo cambios tanto en el entorno del conflicto (crecimiento de algunos grupos armados), como producto de sus decisiones (el enfoque en la captura o muerte de cabecillas de grupos armados, como a las AGC en el sur de Córdoba, al ELN en el sur de Bolívar o a las ACSN en la Sierra Nevada de Santa Marta), que generaron los incentivos para el escenario resultante.

2.2 ¿CÓMO INTERPRETAR LOS INDICADORES DE VIOLENCIA EN COLOMBIA?

Reconocer si la violencia derivada del conflicto armado empeora o mejora parece una tarea sencilla: si los indicadores incrementan, empeoró; si se reducen, mejoró. No obstante, la realidad es más compleja. La reducción de la violencia en un territorio puede ser el resultado tanto del debilitamiento de un grupo armado, como también, paradójicamente, de su fortalecimiento territorial. Esto, porque al adquirir control territorial los grupos armados tienen menos incentivos para ejercer violencias indiscriminadas. La amenaza de la violencia o su uso selectivo pasan a ser herramientas más efectivas (Kalyvas, 2006; Balcells, 2017; Steele, 2017).

Para darle sentido a esas contradicciones, proponemos que se entienda la violencia derivada del conflicto en varias direcciones: ascendente, descendente y horizontal (gráfica 1). La ascendente es aquella generada entre el Estado y las organizaciones armadas. La descendente es la que las organizaciones armadas o el Estado ejercen contra la población civil. Y la violencia horizontal es la que se genera entre grupos armados ilegales. Nuestro argumento básico es que estas violencias no se mueven siempre igual. Por ejemplo, en el sur de Bolívar el pacto de no agresión entre las AGC y el ELN redujo la violencia horizontal, pero las violencias ascendentes y descendentes se sostuvieron o incluso se incrementaron.

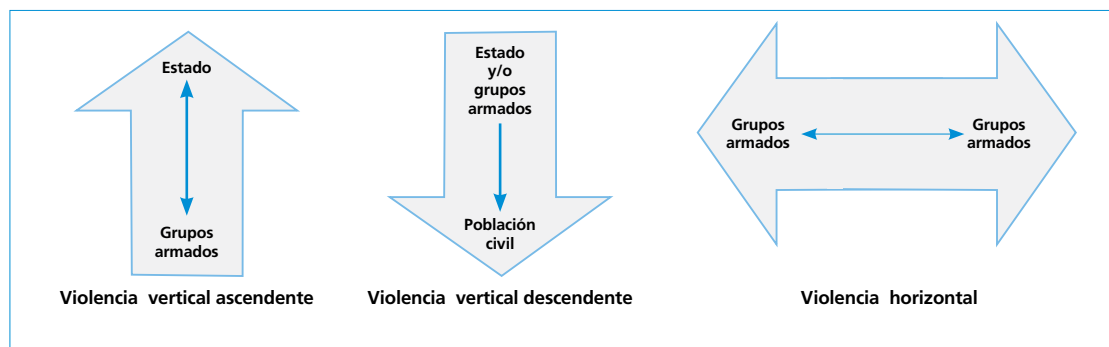
7 Subregión conformada por los municipios Aguachica, Cumananí, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque (véase mapa 3 en el anexo 1, página 24).

8 Conformada por los municipios Tierralta, Montelibano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré (véase mapa 4 en el anexo 1, página 25).

9 Incluye municipios de dos departamentos: Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano; y Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolviejo (véase mapa 5 en el anexo 1, página 26).

10 Una caracterización más extensiva de la historia y el presente de los conflictos armados en el Caribe colombiano

puede encontrarse en Trejos, Badillo e Irreño (2019) y Trejos, Tuirán, Badillo y Mercado (2021).

Gráfica 1**Tipos de violencia en los conflictos armados**

Al tiempo, los impactos de esta violencia pueden ser masivos: desplazamientos forzados masivos o confinamientos, por ejemplo; o selectivos: desplazamientos forzados de individuos o grupos pequeños de individuos, asesinatos selectivos, por ejemplo. Al asumir control territorial, los grupos armados presumiblemente tienen más incentivos para optar por la violencia selectiva y no la masiva, dado que así evitan atraer la atención del Estado y los medios de comunicación.

Nuestro argumento es que la Paz total generó incentivos en los grupos armados para reducir la violencia ascendente. Activamente, los ceses al fuego con el ELN y el EMC demarcan un marco legal sobre el que esta violencia está prohibida. Pasivamente, grupos como las ACSN y las AGC tienen pocos incentivos para atacar al Estado dado que así pueden nutrir la posición que pretenden como actores políticos. Esto explica por qué desde el inicio del gobierno Petro prácticamente no ha habido combates entre estos grupos armados y el Estado a pesar de que no hay un cese al fuego activo.

Al tiempo, los grupos armados tienen más incentivos para evitar la violencia masiva, puesto que esta es la más fácil de registrar en indicadores y deslegitimaría sus posiciones en las mesas de negociación. Los desplazamientos masivos, los confinamientos o las masacres son usualmente motivo de discusión pública en las noticias y a mediano plazo son las señales más utilizadas para señalar un deterioro de la guerra. En consecuencia, si estos eventos suceden en sus territorios, los grupos armados perderían la legitimidad que les da algún poder de mover las agendas de las mesas de negociación.

No obstante, la Paz total no ha generado ningún incentivo para que estos grupos reduzcan las violencias horizontales y descendentes, principalmente las que son selectivas. De hecho, esto no es ningún secreto: Antonio García, el primer comandante del ELN, al referirse al secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, afirmó que “no existe dicho acuerdo donde el ELN se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad con carácter económico, para obtener recursos que permitan sostener sus estructuras”. Al inicio del cese al fuego, García dijo que había ordenado a todas sus estructuras “suspender las operaciones ofensivas contra las fuerzas armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano” (*La Silla Vacía*, 12 de noviembre de 2023), por lo que queda claro que ni las acciones contra civiles (violencia descendente) ni las acciones contra otros grupos armados (horizontal) están en discusión.

El resultado de esta estructura de incentivos es que varios indicadores van a reducirse temporalmente porque o suelen ser producto de violencias masivas (como los desplazamientos forzados o el confinamiento) o ascendentes, como los combates con el Estado. Esto es de lo que da cuenta el documento producido por la JEP (2023). No obstante, las violencias horizontales, por ejemplo, combates entre grupos armados, han permanecido prácticamente inalteradas. Y, lo que es todavía más importante: la violencia selectiva desarrollada en el marco de gobernanzas armadas puede incluso pasar desapercibida. En la siguiente sección desarrollamos esta idea.

3

LAS GOBERNANZAS ARMADAS DEL CARIBE

El concepto de gobernanza armada es un término sombrilla para incluir tanto gobernanzas rebeldes como criminales. Las primeras son desarrolladas por grupos insurgentes (Arjona, Kasfir y Mampilly, 2015) y las segundas por grupos criminales (Lessing, 2021). En ambos casos, los grupos armados emprenden acciones que buscan regular la vida social, política y económica de los civiles en territorios en los que actúan. Por lo tanto, las reglas de la vida en comunidad en estas zonas están compuestas por una compleja estructura que va desde aquellas impuestas por el Estado, hasta las impuestas por los grupos armados (Arjona, 2017).

La diferencia entre las gobernanzas rebeldes y las criminales, además del grupo armado que suele llevarlas a cabo, es el nivel de incrustación en el Estado que pueden alcanzar las segundas (Barnes, 2017). Los grupos criminales por lo general sacan provecho de sus conexiones con funcionarios estatales para solidificar su gobernanza (Arias, 2006). Sin embargo, las formas en las que grupos rebeldes y criminales ejercen estas gobernanzas y cómo el Estado suele responder pueden variar ampliamente (Arias y Johnson, 2023), por lo que hemos decidido no utilizar esa división y utilizar el término “gobernanza armada”. Con esto, buscamos capturar la interacción que, en estas zonas, se produce entre grupos armados y civiles.

En el Caribe colombiano las gobernanzas armadas suelen darse en contextos de hegemonía territorial. Es decir, en situaciones en las que un actor armado se ha logrado imponer sobre otros y, en consecuencia, puede establecer reglas con cierta estabilidad sin que sus rivales las reten. Lo cual no implica necesariamente control territorial exclusivo: las AGC y el ELN ejercieron gobernanzas en el sur de Bolívar mientras estuvo activa su paz mafiosa, y en Barranquilla los Costeños han establecido cierto nivel de

gobernanza criminal en algunos barrios sin tener control territorial. No obstante, si más de un grupo intenta dar órdenes al mismo tiempo y en el mismo espacio, esto puede producir inestabilidad e incrementar la violencia.

En las subregiones del Caribe colombiano observamos de forma consistente que las gobernanzas armadas comparten, con cierta variación, tres elementos. Primero, incluyen la regulación de mercados legales o ilegales, como, en algunos casos, el narcotráfico y el microtráfico, pero es mucho más que eso. Algunos mercados que han sido regulados por estas gobernanzas criminales son la extorsión a civiles y funcionarios, el lavado de dinero y la apropiación de tierras. Las gobernanzas armadas parecen ser funcionales entonces para expandir el portafolio de actividades de las que los grupos armados se benefician.

Segundo, esas gobernanzas no solo se sostienen mediante la violencia, sino que hay ciertos procesos sociales que las legitiman. Los grupos armados han creado o capturado organizaciones sociales o políticas que les son funcionales para acumular cierta legitimidad y que movilizan también a sectores de la población. Pero, además, suelen proveer bienes y servicios útiles para satisfacer algunas necesidades básicas. Así, algunos civiles pueden considerar la gobernanza de un grupo armado como provechosa.

Tercero, las gobernanzas armadas suelen estar asociadas con una reducción de violencias masivas. El sur de Córdoba es un ejemplo diciente: en 2019, justo en el pico de la guerra entre las AGC y los Caparros, hubo más de cuatro mil personas desplazadas en el departamento. Durante los primeros once meses de 2023, cuando las AGC consolidaron su gobernanza criminal, no hubo ningún desplazamiento masivo registrado por OCHA. Aun

así, al menos diez civiles han sido asesinados (siendo esta una cantidad conservadora) y ha habido restricciones para el acceso humanitario (OCHA Monitor, accedido el 11 de diciembre de 2023). La violencia está lejos de desaparecer, pero las gobernanzas armadas parecen llevar a un declive de las más masivas y visibles. En esos contextos, usualmente es selectiva y en contra de quienes violan o amenazan con violar el orden social establecido por el grupo armado.

A continuación presentamos un breve repaso por algunas de las gobernanzas armadas en zonas de conflicto del Caribe colombiano.

3.1 LA TRONCAL DEL CARIBE, VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Esta gobernanza criminal es gestionada por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, un grupo armado que existe en la región desde hace varias décadas y se ha transformado en múltiples cosas, habiendo sido parte incluso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El elemento común de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada es Hernán Giraldo¹¹ y su familia.

Entonces, esta gobernanza criminal no es nueva: durante varias décadas, muchas zonas de la Troncal del Caribe han estado bajo el mando de Giraldo o los grupos que fue creando. En la Tabla 1 de Anexo 2 (página 27) hay algunos elementos de contexto que ayudan a situar las diferentes expresiones de violencia lideradas por los Giraldo en esta subregión.

En la actualidad, esta gobernanza se apalanca en la extorsión al turismo, la apropiación de tierras, el ofrecimiento de permisos para que otros delincuentes actúen en sus áreas y en la regulación de la compra y venta de tierras.

En 2018, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo aseguró que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada:

han impuesto el pago de porcentajes económicos (10%) para las negociaciones de predios (compraventas) aledaños al mar y en la Sierra; han impuesto controles impositivos sobre los intercambios comerciales de mercancías al por mayor y al detal (víveres, rancho, licores, alimentos, combustibles, maderas, entre otros) de todos los establecimientos comerciales que existen en los centros poblados, corregimientos y veredas, [y] han impuesto controles a los operadores de servicios turísticos de Santa Marta (zona rural), Dibulla y de la Sierra (p. 5).

El incumplimiento de estas disposiciones implica castigos como amenazas de muerte, despojo de tierras, desplazamiento forzado, atentados, robos, homicidios, secuestros o desaparición forzada (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018a; *La Liga contra el Silencio*, 2020). Además de estas funciones predatorias, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada también se han involucrado en la provisión de bienes y servicios tales como el mantenimiento a las vías de acceso a las zonas rurales de ciertos corregimientos y las garantías de seguridad, impidiendo a la delincuencia común actuar en sus zonas de influencia.

3.2 SUR DEL CESAR

En esta subregión el ELN es el grupo armado hegemónico y ha podido construir una gobernanza rebelde. Esta insurgencia armada fue la primera organización guerrillera que hizo presencia en ese territorio a finales de la década de los sesenta. En el sur del Cesar, el ELN ha asumido un rol de agente dinamizador de la participación de las comunidades en la gestión de los problemas locales. Para ello, utilizan unas comisiones de Trabajo Político Organizativo (TPO) que contribuyen a la creación, promoción y orientación de organizaciones sociales legales,

11 Conocido también como el Viejo o el Patrón, Giraldo fue el fundador de los Chamizos y las Autodefensas del Mamey, conocidas luego como las Autodefensas del Magdalena y La Guajira y que se desmovilizaron como bloque Resistencia Tayrona de las AUC. A finales de la década de los noventa llegó a controlar criminalmente el norte del departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta. En la actualidad está privado de la libertad porque la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que entre 2007 y 2008 perpetró varios delitos de violencia basada en género contra cuatro menores de edad, mientras se encontraba en cárceles colombianas.

como Juntas de Acción Comunal, Comités de Caminos o clubes deportivos. Paralelamente, gestionan la creación de organizaciones clandestinas, como colectivos o grupos de estudio que pretenden orientar el trabajo de sus milicianos.

Sin embargo, esta relación con las comunidades las pone en riesgo permanente, dado que las expone a la estigmatización y a señalamientos constantes. Tanto otras organizaciones armadas –como el Ejército Popular de Liberación (EPL) o las AGC– como el mismo Estado suelen asumir que muchas organizaciones civiles son parte del ELN, lo que incrementa el riesgo de que sean involucradas en la guerra. Asimismo, este grupo cobra extorsiones (que llaman “impuesto de guerra”) y limita constantemente la movilidad en el territorio. Aun así, la violencia en el sur del Cesar ha solido ser de carácter vertical: el ELN haciendo atentados u hostigamientos contra la fuerza pública (Badillo, 2018).

3.3 SUR DE CÓRDOBA

Desde que expulsaron a los Caparros, en el sur de Córdoba las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han profundizado su gobernanza criminal. No obstante, al menos desde 2017 hay evidencia de que había procesos no solo de participación en mercados ilegales, sino de regulación de la vida en comunidad. Algunas de sus regulaciones incluyen la prohibición de utilizar ciertos colores en las prendas de vestir (rojo y verde oscuro, según reporta la Organización de los Estados Americanos, 2023a: 8) y de usar elementos que cubran el rostro como gorras o gafas (Organización de los Estados Americanos, 2023b: 6).

Las AGC tienen control casi absoluto de las dinámicas sociales, lo que les ha permitido en distintos momentos, por ejemplo, impedir la movilidad de los civiles, como quedó demostrado durante el paro armado de 2022 (JEP, 2022). Durante el covid-19 establecieron controles para garantizar las cuarentenas y evitar el contagio (HRW, 15 de julio de 2020). Asimismo, se han registrado mecanismos para castigar a las personas acusadas de cometer violencia de género¹². Así, en esta subregión no

solo explotan los recursos económicos legales e ilegales, sino que proveen bienes y servicios para sectores de la población que gobiernan.

El establecimiento hegemónico de las AGC, y con ello la profundización de su gobernanza criminal, ha coincidido con una reducción abrupta de la violencia en esta subregión. Solo para poner un ejemplo: entre 2017 y 2018, los homicidios en el sur de Córdoba aumentaron 80%, y en 2019 alcanzaron un pico de 110%. San José de Uré, usualmente con entre uno y seis homicidios, llegó a tener hasta veintiuno en un solo año. Con excepción de Valencia, esta tendencia se sostuvo en todos los municipios de la subregión. Por el contrario, desde 2020 la cantidad de homicidios se ha reducido notoriamente, llegando a sesenta y cinco para toda la subregión en 2022, una reducción de 30% comparada con el año anterior, y limitándose a uno en San José de Uré durante todo ese año. Con el desplazamiento forzado la tendencia es la misma: entre 2021 y 2022, los desplazamientos masivos producto de la violencia se redujeron en más del 70% en el departamento de Córdoba (OCHA Monitor, accedido el 10 de diciembre de 2023).

3.4 MONTES DE MARÍA

Entre 2018 y 2022 la Defensoría del Pueblo alertó por la llegada y establecimiento de estructuras de las AGC en el Carmen de Bolívar (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018b; 2020a), San Onofre (2018c), María La Baja (2019), San Marcos, Guaranda, San Benito Abad, Maja-gual, Sucre (Defensoría del Pueblo, 2020b) y Ovejas. Las AGC han logrado el control pleno de la subregión, lo cual les ha permitido, así como en el sur de Córdoba, dosificar la administración de la violencia en la medida en que no tienen competidores armados y han logrado captar parte del movimiento social local.

Un ejemplo de esto es la participación velada que tuvo el grupo armado en las elecciones. Según registró *El Espectador* (2023b), en la subregión algunas candidaturas fueron restringidas y otras apoyadas por las AGC. De acuerdo con comentario de un defensor de derechos humanos que habita allí:

12 Entrevista de los autores, 23 de noviembre de 2023.

acá hay varios actuales mandatarios locales que ya apoyan o reciben órdenes de ese grupo, y el miedo que tenemos es que en esta región se repita lo que ya vivimos con la parapolítica: que las AGC pongan sus candidatos en estas elecciones y logren aún más control territorial, político y de recursos (*El Espectador*, 2023a).

El panorama general en Montes de María muestra que las AGC ya no son solo un actor predatorio de recursos

ilegales, por el contrario, proveen de bienes y servicios a la población local, tales como la resolución de conflictos, el castigo a las personas que incumplan con las normas establecidas, el control de la apertura o cierre de vías o caminos, el mantenimiento de los caminos entre veredas y municipios y la financiación de proyectos de interés comunitario, entre otras cosas (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2022a).

4

INCENTIVOS DE LA PAZ TOTAL

Como dijimos en la sección de contexto: ninguno de los escenarios de violencia en el Caribe colombiano es un producto directo de la Paz total. Todos existían desde antes y casi todas las tendencias observadas se vienen dando desde incluso antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. Por tanto, no hay forma (y no es el propósito de este artículo) de sostener que la Paz total generó manifestaciones de violencia que, a todas luces, existían previamente. Nuestro argumento es, más bien, que la forma en que esta se ha estructurado ha generado incentivos para que los grupos armados reduzcan su violencia ascendente y su violencia masiva (como demuestran varios informes), pero incrementen o sostengan su violencia horizontal y la descendente (por medio de las gobernanzas armadas).

4.1 VIOLENCIA HORIZONTAL

Como ya mencionamos, el ELN y el EMC tienen ceses al fuego activos con el Estado colombiano, y las ACSN y las AGC han manifestado también su cese de operaciones contra la Fuerza Pública. Nuestro argumento es que, dado que el cese al fuego únicamente cubre la violencia vertical, en la práctica estos le permitieron a los grupos armados liberarse de un frente de confrontación bélica, en este caso, con la Fuerza Pública, y poder concentrarse en enfrentar a sus competidores armados. En algunos casos, esto les ha permitido incluso poder extender su dominio territorial. No es casual que la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2023), al comparar el último año de la administración Duque con el primero del gobierno Petro reporte una disminución de 47% en los ataques contra la Fuerza Pública, pero un aumento del 85% en la confrontación armada entre grupos armados. Tres subregiones del Caribe colombiano (Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar y sur del Cesar) ilustran este argumento.

Durante 2023 se escalaron y expandieron las confrontaciones armadas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los combates registrados entre enero y noviembre de ese año incluyen las zonas rurales de Riohacha (19 de agosto), Aracataca (27 de septiembre) y la cuenca del río Jerez en La Guajira (8, 9, 20 y 21 de octubre) (abcolombia.org, 2023). Los combates entre las ACSN y las AGC en la vertiente norte de la Sierra son los primeros registrados en esta zona desde la desmovilización de las AUC hacia 2006.

La situación en el sur de Bolívar¹³ es mucho más compleja, ya que desde 2021 el ELN¹⁴, el EMC¹⁵ y las AGC¹⁶ se enfrentan por el control de cultivos de uso ilícito y las minas formales e informales de oro. Esta confrontación ha producido importantes afectaciones humanitarias. Por ejemplo, las víctimas de desplazamientos forzados masivos en el departamento pasaron de ser poco más de cien en 2020 a más de tres mil trescientas en 2022 (OCHA Monitor, 2023, accedido el 10 de diciembre de 2023). Por lo general, estos desplazamientos son el resultado de combates entre grupos armados (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2023a; Aponte y González, 2021).

13 Para entender el contexto reciente de violencia armada en esta subregión, véase: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021.

14 Frentes guerrilleros: Édgar Amílkar Grimaldo Barón, Luis José Solano Sepúlveda, Héroes y Mártires de Santa Rosa, Alfredo Gómez Quiñonez, Guillermo Ariza y la compañía Simón Bolívar, todos adscritos al frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro.

15 Frentes: 4, 24 y 37.

16 Bloque Aristides Mesa Páez con las estructuras armadas: Édgar Madrid Benjumea, Luis Alfonso Echavarría y Herlin Pino Duarte.

En la violencia letal esta tendencia también es evidente: los homicidios en la subregión se incrementaron 29% en 2021, 54% en 2022 y entre enero y noviembre del 2023 hubo un aumento de 9,46% comparado con todo 2022. Simití es el caso más dramático: los homicidios pasaron de ser cuatro en 2021 a veintitrés en 2022. La Paz total ha hecho entonces poco por mitigar esta violencia horizontal que tiene efectos (a veces intencionales y a veces colaterales) en la violencia contra los civiles.

En el sur del Cesar, si bien hasta el momento no ha habido confrontaciones directas, la Defensoría del Pueblo ha alertado de un incremento notorio de las tensiones entre los grupos armados. Desde 2021 las AGC han estado intentando penetrar esta región para moverse hacia el Catatumbo. En diferentes momentos se ha registrado asimismo la presencia de estructuras del EPL y del EMC. En todos los casos, la violencia ha sido selectiva y dirigida sobre todo contra civiles que estos grupos consideran aliados de sus enemigos o que alteran el orden social (por ejemplo, porque se dedican a actividades ilegales), con lo que buscan solidificar su legitimidad y mermar la de sus rivales (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2023b).

Hay tres eventos que, sin ánimo de ser extensivos, ejemplifican estas dinámicas. Primero, un candidato al Concejo de Pelaya recibió un mensaje de WhatsApp en septiembre de 2023 que decía: “no lo queremos ver más acá si usted no va a colaborar con la organización. A otros sí les está colaborando. (...) por su familia espero que coopere con nosotros” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2022b: 19). Segundo, un comandante del ELN intimidó a un empresario rural diciéndole que necesitaba contribuir con un “impuesto de guerra” y que se abstuviera de “hacerles cualquier pago o contribución a las autodefensas” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2022b: 34). Finalmente, el EPL ha enviado mensajes a las comunidades durante protestas, sugiriendo que detrás de ellas se encuentra el ELN y que, por lo tanto, deberían acabarlas (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2022b: 3). Estas tensiones se han manifestado explícitamente en los niveles de homicidios: solo entre enero y noviembre de 2023, en el sur del Cesar hubo solo un homicidio menos que todos los que hubo durante 2022.

4.2 GOBERNANZAS ARMADAS

Como ya mencionamos, en el Caribe colombiano las gobernanzas armadas han solido implicar una reducción de las violencias masivas de los grupos armados y un incremento o sostenimiento de violencias más selectivas, como homicidios, amenazas o intimidaciones, a todos los que incumplan con el orden social establecido. Debido al énfasis que el Gobierno colombiano ha puesto en la reducción de los impactos humanitarios, la Paz total ha generado incentivos para que los grupos armados reduzcan las violencias masivas, lo cual no necesariamente implica la reducción de sus niveles de control sobre las vidas de los civiles. En consecuencia, las violencias más selectivas, que en algunos indicadores difícilmente aparecen, en zonas de férreo control de los grupos armados no necesariamente se han reducido.

El caso de Montes de María es diciente al respecto. En diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia (2022a) manifestó que:

en la actualidad, no solo se trata de estrategias de violencia manifiesta. Estas se complementan, combinan o alternan con acciones que pretenden el apoyo, respaldo, la financiación y la aceptación de la comunidad, lo que profundiza su dominio político y social (p. 12).

Al respecto, Uribe et al. (2022) muestran que solo una porción de los grupos criminales en América Latina ejerce gobernanzas criminales. Es decir, la provisión de bienes y servicios por parte de las AGC hacia las comunidades de Montes de María es un ejercicio intencional de controlar la violencia y usurpar algunas funciones tradicionalmente asociadas al Estado.

Para las AGC este proceso de gobernanza criminal implica, por ejemplo, el control de la delincuencia común en las zonas donde dominan, proveyendo una sensación de seguridad a los civiles. Lo cual puede implicar el desplazamiento o asesinato de personas acusadas de hurtar de forma continuada y la obligación de los encargados del microtráfico de rendir cuentas a la organización para minimizar la violencia. Paralelamente, han establecido normas de conducta para las comunidades que son transmitidas por medio de reuniones con líderes sociales o la población en general. La Defensoría del Pueblo

de Colombia (2022a) también menciona que el grupo armado se ha involucrado con organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, Consejos Comunitarios, organizaciones de víctimas o incluso espacios institucionales, lo que solidifica su control.

Este panorama ha sido confirmado por diferentes fuentes, incluidos reportes de *El Espectador* (16 de mayo de 2023d; 21 de mayo de 2023b; 22 de mayo de 2023b) en los que cuentan que algunos grafitis en postes dicen “Acá mandamos nosotros. Todo lo vemos. Nada de sapos”. La población civil parece percibirlo claramente al referirse a las AGC: “está remplazando a las autoridades, imponiendo sanciones y horarios de entrada y salida, metiéndose en la vida cotidiana de las comunidades” (*El Espectador*, 21 de mayo de 2023c). Ni siquiera la violencia letal se ha reducido en la región: solo entre enero y noviembre del 2023 hubo la misma cantidad de homicidios que durante todo 2022.

En síntesis, nuestro argumento es que la Paz total incentivó a los grupos armados a reforzar un sistema de gobernanza criminal. Esto les permite no solo seguir desarrollando sus actividades ilegales, sino controlar la violencia producida por otros actores (como la delincuencia común) y sus propios miembros. Al tiempo, pueden ganar legitimidad entre la población civil, dado que proveen de bienes y servicios que suplen algunas necesidades. Todo esto sin que haya muchos indicadores que alerten sobre la situación, lo que evita la pérdida de legitimidad frente al Gobierno nacional.

4.3 POLITIZACIÓN

Finalmente, el Gobierno del presidente Petro hizo una división tajante entre grupos políticos y no políticos, división que tiene efectos en lo que el Gobierno está dispuesto a ofrecer: los primeros tendrán acceso a una mesa de negociación y a un proceso de justicia transicional mientras que los segundos tendrán que aceptar su sometimiento a la justicia. Naturalmente, cualquier grupo armado tiene grandes incentivos para acceder a una negociación y no a un sometimiento. En una negociación pueden buscar mejores penas para quienes sean condenados e incluso sacar adelante una agenda

política que incremente su legitimidad. Pero, podría preguntarse: ¿qué agenda si estos grupos armados son solo criminales?

Aquí es donde los sistemas de incentivos se conjugan con historias más complejas que las que permite esa división binaria del gobierno nacional. Las AGC, al menos desde 2009, cuentan con una agenda política que incluye estatutos en donde expresan las razones de estar en armas, pero también otros instrumentos que van desde páginas web hasta un periódico que circula en algunas subregiones llamado *El Gaitanista*. Algunos de sus miembros son entrenados en estas narrativas antes de iniciar operaciones (Badillo y Trejos, 2023).

Las ACSN, por su parte, si bien no tienen la estructura discursiva robusta de las AGC han empezado a tener desde hace algunos años una narrativa similar. En julio de 2019 se presentaron como las ACSN por primera vez, en lugar de los Pachencas o la Oficina, nombres con los que antes se les conocía. Luego, en 2020, publicaron un vídeo de diecisiete minutos hablando sobre su participación en política en la Sierra Nevada de Santa Marta y afirmaban existir ante el vacío de seguridad del Estado en la región (Badillo, 30 de octubre de 2023).

Estos procesos de politización existían antes de la Paz total. Sin embargo, cuando el gobierno decide arbitrariamente asignarles a estos grupos la etiqueta de criminales, mientras a otros la etiqueta de políticos, y ofrecer sometimiento o negociación dependiendo de eso, crea también incentivos para hacer estos procesos de politización más evidentes. Incluso admitiendo que la naturaleza guerrillera del ELN lo convierte naturalmente en un actor político, no parece haber una buena razón para reconocer al EMC como un actor político, mas no a los demás grupos armados. De hecho, como muestra Mantilla (26 de marzo de 2023), la Paz total pudo haber funcionado para que el EMC fortaleciera una apariencia de unidad más sólida de la que en realidad tenía.

Estefanía Ciro (11 de junio de 2023) también señala este riesgo al mencionar que los grupos armados ahora también luchan por las bases sociales. Esto pone en el foco de las discusiones las lealtades de líderes sociales y civiles: si no soportan al grupo armado, esa voz disidente

preferiblemente tendría que desaparecer para no restar legitimidades. Sin ser su intención, el Gobierno les dio gasolina a los discursos políticos de los grupos armados y, más grave aún, los llevó a involucrar a los civiles para legitimarlos. A estas alturas, es difícil que alguno de ellos

quiera renunciar a sus discursos políticos (que han estado allí antes del gobierno actual) y aceptar un sometimiento. Al hacer esta división, el gobierno se condenó a que el sometimiento sea visto como última (si acaso) opción.

5

CONCLUSIONES

En este artículo hemos intentado entender el efecto que la política de Paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido en territorios en conflicto armado en el Caribe colombiano. En lugar de observar las tendencias solo en los indicadores comúnmente analizados (homicidios, desplazamientos o confinamientos, por ejemplo), nos centramos en la estructura de incentivos que la Paz total generó y en cómo los grupos armados podrían estar respondiendo en la región.

Proponemos primero no leer los indicadores de violencia de forma unitaria, sino a partir de tres direcciones: ascendente (entre Estado y grupos armados), descendente (grupos armados contra civiles) y horizontal (entre grupos armados no estatales). Esta forma de entender la violencia derivada del conflicto permite complejizar lecturas que, al mostrar una reducción de algunos indicadores, concluyen entonces que *la violencia*, en general, se ha reducido.

Desde esta lógica, la Paz total ha sido útil para reducir la violencia ascendente y, en consecuencia, algunos indicadores de violencia descendente, usualmente resultados de la primera. No obstante, mostramos que también ha incentivado otros tres fenómenos: la violencia horizontal, las gobernanzas armadas y la politización de los grupos armados.

Con respecto a la violencia horizontal, mostramos cómo los grupos armados en el Caribe están aprovechando no tener que enfrentarse al Estado colombiano para expandir sus zonas de control territorial y retar el dominio de otros actores. Los casos de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y el sur del Cesar ilustran cómo la falta de violencia vertical ha tenido poco impacto en la violencia horizontal que estos

grupos están ejerciendo. Sin embargo, esta parece ser una tendencia extrapolable a nivel nacional: según *El Espectador* (2023a) y la Alerta Temprana 030-23, las AGC pasaron de hacer presencia en doscientos cincuenta y tres municipios en 2019 a estar presentes en trescientos noventa y dos en 2023.

En relación con las gobernanzas armadas, vimos cómo los grupos armados tienen serios incentivos para no alterar significativamente algunos indicadores de impactos humanitarios. En consecuencia, han decidido no solo dedicarse a preñar recursos económicos, sino a proveer bienes y servicios a las comunidades, entre los que están la seguridad, préstamos, la articulación de organizaciones comunitarias y el mantenimiento de las vías y caminos. Al ejercer estos niveles de control sobre las vidas de los civiles, logran también reducir los niveles de violencia, al hacerla más selectiva y dosificada. Con esto, generan una sensación de seguridad que coincide con la idea de que la Paz total redujo los impactos humanitarios. El caso de Montes de María ilustra nuestra idea.

En cuanto a la politización, mostramos cómo la política de Paz total, al hacer una división tajante (y ambigua) entre grupos políticos y criminales, y ofrecer a los primeros negociaciones y a los segundos sometimiento, generó los incentivos para que la mayoría de grupos armados intentaran ser admitidos como políticos. Estos procesos de politización no empezaron con la Paz total. Sin embargo, parece que esos grupos los aceleraron e incluyeron las lealtades de la población civil como parte de los elementos que los legitiman ante el gobierno nacional, lo que a corto plazo pone a las comunidades en riesgo de quedar en medio de las confrontaciones. Los casos de las AGC y ACSN ilustran esta idea.

6

RECOMENDACIONES

- ♦ En el Caribe colombiano el actor armado hegemónico son las AGC. Sorpresivamente, este grupo armado se encuentra por fuera de la estrategia de paz del gobierno. Con excepción del sur de Bolívar y el sur del Cesar, el ELN y el EMC tienen una presencia marginal en la región. Por tanto, incluso en el escenario ideal de que estos logren un acuerdo, no es esperable que las violencias derivadas del conflicto armado en el Caribe se reduzcan sistemáticamente. Sin las AGC en la mesa, allí no habrá paz.
- ♦ Grupos armados como las AGC y las ACSN tienen muy pocos incentivos para aceptar un proceso de sometimiento en lugar de una negociación. Por lo tanto, la división arbitraria entre políticos y criminales deber ser reconsiderada y ajustada al conflicto armado existente hoy en Colombia, no al que hubo hace tres décadas. Es fundamental seguir insistiendo en la formulación de un marco normativo que respalde legalmente los escenarios de diálogo sociojurídico y que permita atraer y vincular formalmente a las AGC y a las ACSN a la política de paz del gobierno nacional.
- ♦ Los ceses al fuego son fundamentales, pero insuficientes, como mostramos. Por tanto, es necesario trazar líneas rojas claras. Por ejemplo, podrían ser multilaterales. Además, al menos, algunas prácticas violatorias del derecho internacional humanitario (como los secuestros o el reclutamiento forzado) deberían ser prohibidas tajantemente.
- ♦ La potencial captación de organizaciones sociales por parte de grupos armados impone un riesgo a la hora de involucrar a los civiles en las negociaciones: es posible que esos grupos tengan o simpatizantes o mecanismos para castigar a quienes no saquen adelante su agenda. En consecuencia, se debe pensar en procesos más complejos para que la participación de las organizaciones de la sociedad civil sea también una forma de incomodar y presionar a los grupos armados para lograr una paz más estable.
- ♦ La paz y la seguridad deben entenderse como dos caras de una misma moneda. Hoy, parece que se sacrifica la estrategia de seguridad en algunos territorios para que los grupos no se levanten de las mesas de negociación. Por lo tanto, el Gobierno del presidente Petro debería establecer una ruta clara de comunicación y coordinación permanente entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa. La descoordinación puede ser utilizada por los grupos armados para expandirse y fortalecerse.
- ♦ El Gobierno debería establecer objetivos claros y medibles de la Paz total. Si el propósito es la reducción de los impactos humanitarios durante su cuatrienio, esto debe ser claro para la ciudadanía. Si, por el contrario, el objetivo es la finalización de distintos conflictos armados, el énfasis debería ser otro. Hasta el momento, la Paz total parece no tener objetivos claros y ser más una sombrilla de procesos que avanzan simultáneamente. Además, los voceros de esta política son tantos y actúan de formas tan descoordinadas que es difícil leer con claridad sus avances. Por mencionar a algunos voceros: el ahora alto comisionado para la Paz Otty Patiño, el senador Iván Cepeda, el ministro Álvaro Leyva y el propio presidente Gustavo Petro. La descoordinación entre ellos no solo le resta legitimidad a la Paz total ante la opinión pública, sino que puede ser utilizada estratégicamente por los grupos armados para presionar a su favor en la mesa de negociación.

REFERENCIAS

- ABColombia.org.uk. Viernes 13 de octubre de 2023. "Urgente: crisis humanitaria en Colombia. Enfrentamientos entre grupos armados ponen en grave peligro a población civil: Sur de Bolívar y Sierra Nevada de Santa Marta". Disponible en: <https://www.abcolombia.org.uk/urgente-crisis-humanitaria-en-colombia/>
- Aponte, A. y F. González (editores). 2021. *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente*. CINEP. Bogotá.
- Arias, E. 2006. "The Dynamics of Criminal Governance: Networks and Social Order in Rio de Janeiro". *Journal of Latin American Studies*. 38 (2), 293-325.
- Arias, E. D. y P. L. Johnson. 2023. "The implications of illicit networks for changes in anti-narcotics policies". *Crime, Law and Social Change*, 1-21.
- Arjona, A. 2017. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge University Press.
- Arjona, A., N. Kasfir y Z. Mampilly. 2015. "Introduction". En A. Arjona., N. Kasfir y Z. Mampilly (eds.). *Rebel Governance in Civil War* (pp. 1-20). Cambridge University Press.
- Badillo, R. 2018. "Conflicto y violencia en el sur del Cesar: de la conflictividad agraria al crimen organizado". *Documento de Trabajo UNCaribe*. 6. Serie de contextos regionales. Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte. Barranquilla.
- , 30 de octubre de 2023. "La politización del crimen en la Sierra Nevada de Santa Marta". *La Silla Vacía*. Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/la-politizacion-del-crimen-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/>
- Badillo, R. y L. F. Trejos. 2023. "Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: un nuevo paradigma del crimen organizado". *Revista Científica General José María Córdova*. 21 (42), 327-351.
- Balcells, L. 2017. *Rivalry and Revenge: The Politics of Violence during Civil War*. Cambridge University Press.
- Barnes, N. 2017. "Criminal politics: An integrated approach to the study of organized crime, politics, and violence". *Perspectives on Politics*. 15 (4), 967-987.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. 2021. *Arrasamiento y control paramilitar en el Sur de Bolívar y Santander. Bloque Central Bolívar: origen y consolidación*. CNMH. Bogotá.
- , 2022. *Un poco de verdad para poder respirar. Trayectoria e impactos de los bloques paramilitares Montes de María y Mojana*. CNMH. Bogotá.
- Ciro, E. 11 de junio de 2023. "Las comunidades y los liderazgos sociales son el actual botín de guerra en Colombia" | ENTREVISTA. *Mongabay. Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica*. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2023/06/comunidades-y-liderazgos-sociales-son-el-actual-botin-de-guerra-en-colombia-entrevista-estefania-ciro/>
- Corredor, J., L. Trejos y R. Badillo. 2022. "Sustituir las gobernanzas armadas: el reto de la Paz total". *La Silla Vacía*. Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/sustituir-las-gobernanzas-armadas-el-reto-de-la-paz-total/>
- Defensoría del Pueblo de Colombia. 2018a. "Alerta Temprana No 045-18 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.
- , 2018b. "Alerta Temprana No 051-18 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2018c. "Alerta Temprana No 061-18 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2019. "Alerta Temprana No 004-19 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2020a. "Alerta Temprana No 006-20 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2020b. "Alerta Temprana No 003-20 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2021. "Alerta Temprana No 009-21". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2022a. "Alerta Temprana No 033-22". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2022b. "Alerta Temprana No 014-22". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2023a. "Alerta Temprana de Inminencia No 025 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2023b. "Alerta Temprana No 035 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

----- . 2023c. "Alerta Temprana No 034 de 2023". Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

Elespectador.com. 29 de octubre de 2023a. "Elecciones: los riesgos de las zonas controladas por los grupos armados ilegales". Disponible en: <https://www.elspectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/elecciones-regionales-riesgos-que-tienen-los-territorios-controlados-por-los-grupos-armados-ilegales/>

----- . 22 de mayo de 2023b. "Así funciona el entramado criminal del Clan del Golfo en Montes de María". Disponible en: <https://www.elspectador.com/colombia-20/conflicto/asi-funciona-el-entramado-criminal-de-clan-del-golfo-en-montes-de-maria-temores-con-paz-total/>

----- . 21 de mayo de 2023c. "La barbarie paramilitar que revive el Clan del Golfo en Montes de María". Disponible en: <https://www.elspectador.com/colombia-20/conflicto/control-del-clan-del-golfo-aumento-en-montes-de-maria-tras-eleccion-de-petro-paz-total/>

----- . 16 de mayo de 2023d. "Así está reciclando el Clan del Golfo el conflicto armado en Ovejas (Su-

cre)". Disponible en: <https://www.elspectador.com/colombia-20/conflicto/aumento-de-violencia-y-conflicto-de-agc-o-clan-del-golfo-en-ovejas-sucre-y-montes-de-maria/>

Eltiempo.com. 21 de noviembre de 2023. "Estos son los departamentos con más minería ilegal de oro de aluvión en Colombia". Disponible en: <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/departamentos-con-mas-mineria-ilegal-de-oro-en-aluvion-de-colombia-2022-827925>

Forero, J. y D. Amaya. 2021. "El ELN en el Sur de Bolívar: la pérdida de un bastión militar". En A. Aponte y F. González (editores). *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente*. CINEP. Bogotá.

Fundación Ideas para la Paz. 2023. *Paz total, disputas e inseguridad en el primer año del gobierno Petro*. FIP. Bogotá.

González, F. (editor). 2021. "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada". *Documentos ocasionales*. 84. CINEP. Bogotá.

HRW. 15 de julio de 2020. "Colombia: Armed Groups' Brutal Covid-19 Measures. Killings, Threats, and Social Control". Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2020/07/15/colombia-armed-groups-brutal-covid-19-measures>

Jurisdicción Especial para la Paz. 2022. "Desafíos a las garantías de no repetición. Un balance general de las acciones violentas cometidas por el Clan del Golfo durante seis días de paro armado, mayo de 2022". Disponible en: <https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Desaf%C3%A2Dos%20a%20las%20garant%C3%ADas%20de%20no%20repetici%C3%B3n.%20Un%20balance%20general%20de%20las%20acciones%20violentas%20cometidas%20por%20el%20Clan%20del%20Golfo%20durante%20seis%20d%C3%ADas%20de%20paro%20armado,%20mayo%20de%202022.pdf>

----- . 2023. "Análisis de la situación de derechos humanos y seguridad en Colombia: impactos de los ceses al fuego y la Paz total". Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/12UEkFbzV6Pan3TwaaEr-suEG5ypQJJL/view>

Kalyvas, S. N. 2006. *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge University Press.

La Liga contra el Silencio. 2020, 3 de diciembre. "Una maquina paramilitar intimida a Santa Marta". Disponible en: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/una-maquina-paramilitar-intimida-a-santa-marta/>

La Silla Vacía. 12 de noviembre de 2023. "Antonio García dijo que ELN no ha violado cese al fuego". Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/en-vivo/antonio-garcia-dijo-que-eln-no-ha-violado-cese-al-fuego/>

Lessing, B. 2021. "Conceptualizing Criminal Governance". *Perspectives on Politics*. 19 (3), 854-873.

Mantilla, J. 26 de marzo de 2023. "Enredo Mayor Central: ¿Será posible la negociación entre el gobierno y las disidencias?". *Razón Pública*. Disponible en: <https://razonpublica.com/enredo-mayor-central-sera-posible-la-negociacion-gobierno-las-disidencias/>

OCHA Monitor. 2023. "Situación humanitaria de Colombia". Accedido el 10 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://monitor.unocha.org/colombia>

Organización de los Estados Americanos. 2023a. "Trigésimo cuarto informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)". Disponible en: <https://scm.oas.org/pdfs/2023/cp47647SCP.pdf>

------. 2023b. "Trigésimo quinto informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)". Disponible en: https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2023/11/INFORME_MAPPOEA_35.pdf

Sarmiento, J. y L. Trejos. 2020. *El otro derecho. Estudios sobre reglas, burocracia de la guerra y su asimilación a la legalidad en el Caribe colombiano*. Editorial Universidad del Norte. Barranquilla.

Staniland, P. 2012. "States, Insurgents, and Wartime Political Orders". *Perspectives on Politics*. 10 (2), 243-264.

Steele, A. 2017. *Democracy and Displacement in Colombia's Civil War*. Cornell University Press.

Trejos, L. 2023. *¿De qué manera intervienen los grupos armados en las dinámicas político-electorales? FES Briefing*. Noviembre. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bogotá.

Trejos, L., R. Badillo Sarmiento e Y. Irreño Quijano. 2019. "El Caribe colombiano: entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto". *Jurídicas CUC*. 15 (1), 9-46.

Trejos, L., A. Bravo y R. Badillo. 2021. "Hacia una comprensión de los múltiples conflictos colombianos: evolución teórica en el análisis de la confrontación armada". *Coherencia*. 18 (34), 34-18.

Trejos, L., Á. Tuirán, R. Badillo Sarmiento y A. Mercado Ramos. 2021. *Gestión administrativa local y paz territorial: un análisis de las subregiones PDET en el Caribe colombiano*. Editorial Universidad del Norte. Barranquilla.

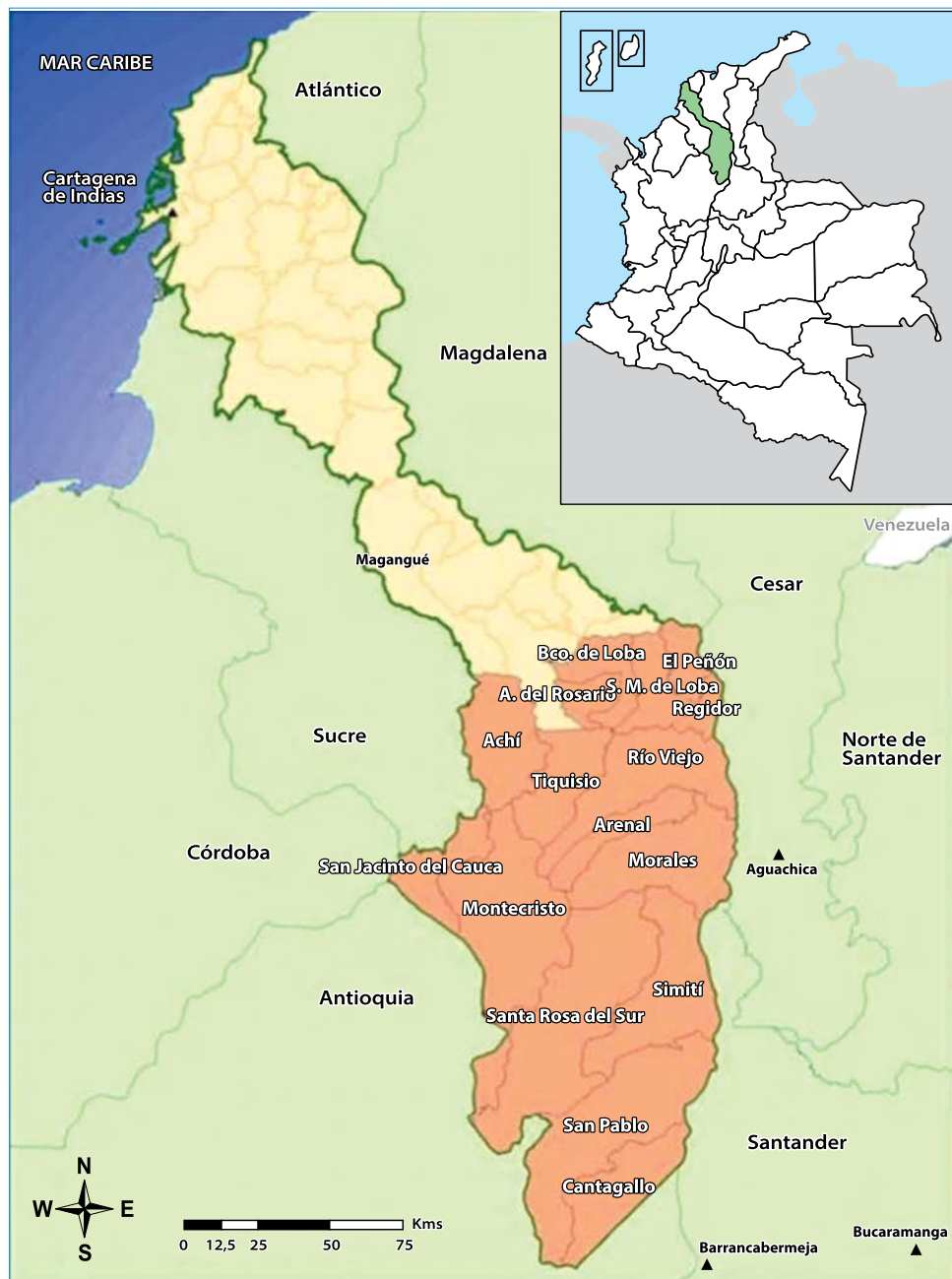
UNODC. 2023. "Colombia. Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022". Bogotá: UNODC. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/INFORME_MONITOREO_DE_TERRITORIOS_CON_PRESENCIA_DE_CULTIVOS_DE_COCA_2022.pdf

Uribe, A., B. Lessing, N. Schouela, E. Stecher y D. Block. 2022. "Criminal Governance in Latin America: An Initial Assessment of its Extent and Correlates". Disponible en. *SSRN 4302432*.

ANEXOS

ANEXO 1. MAPAS

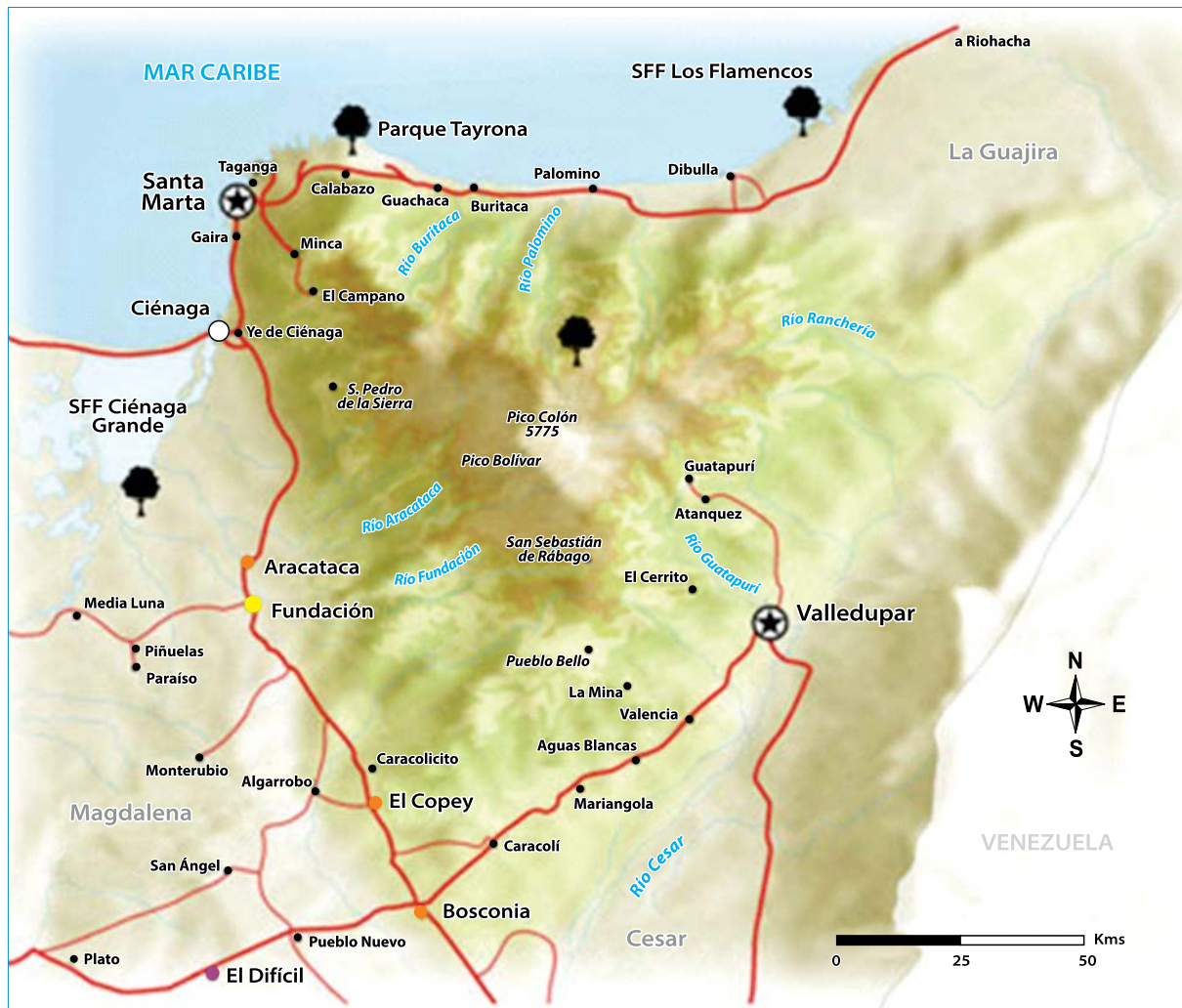
Mapa 1
Sur de Bolívar



Fuente: <https://www.redcolombia.org/2011/08/07/continua-la-caravana-por-el-sur-de-bolr/org/2011/08/07/continua-la-caravana-por-el-sur-de-bolr/>

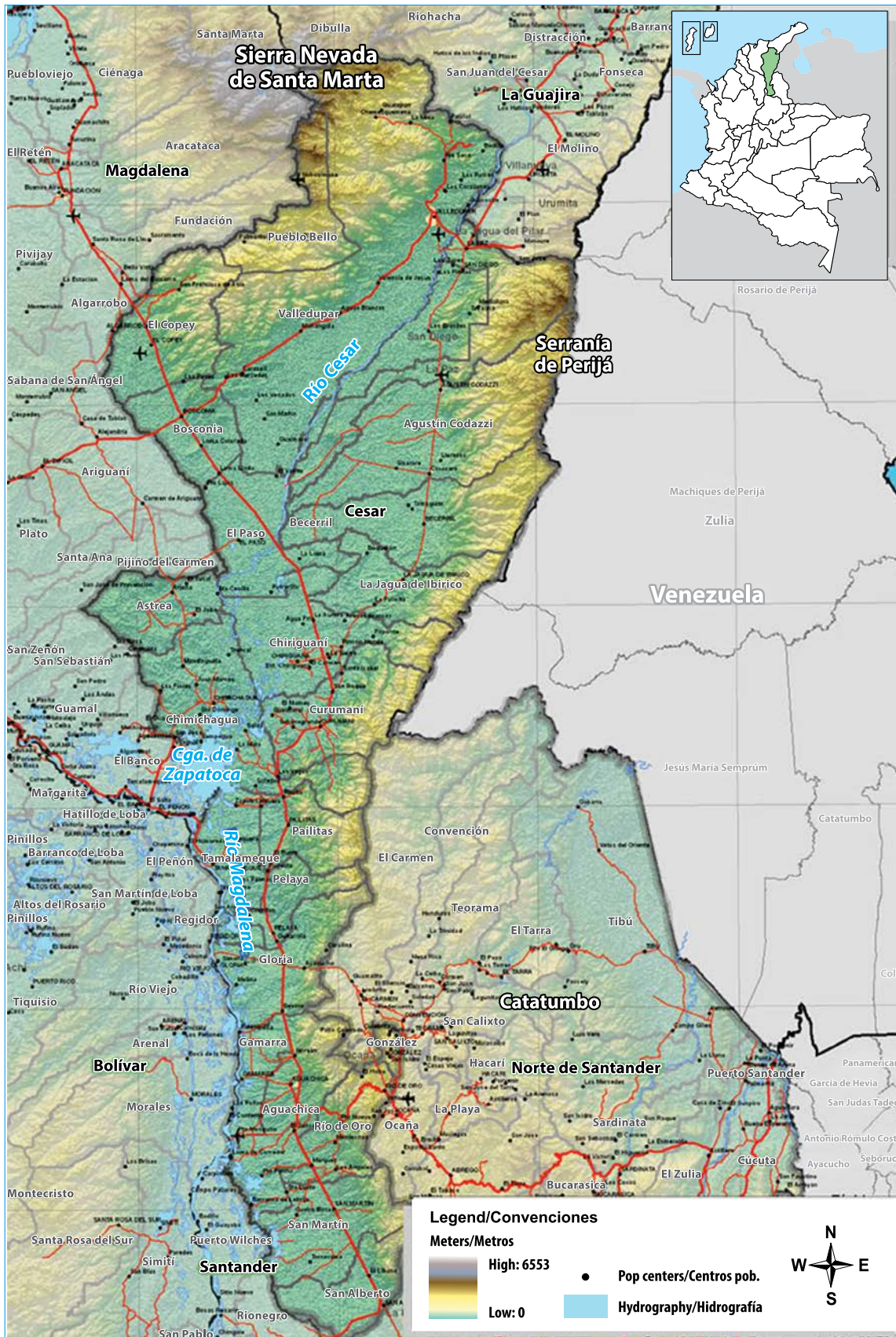
Mapa 2

Sierra Nevada de Santa Marta



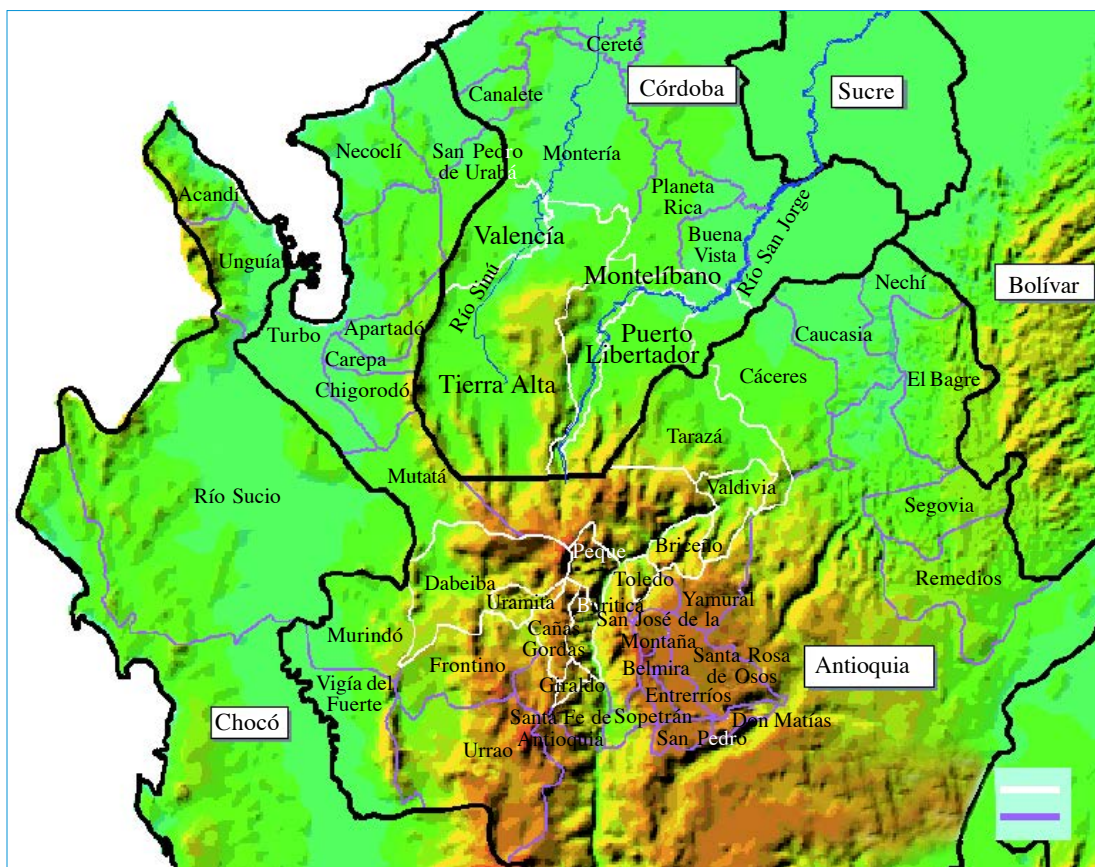
Fuente: <https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebpageNotFound?path=/sierrasantamarta8/proceso/actividad-3>

Mapa 3
Sur del Cesar



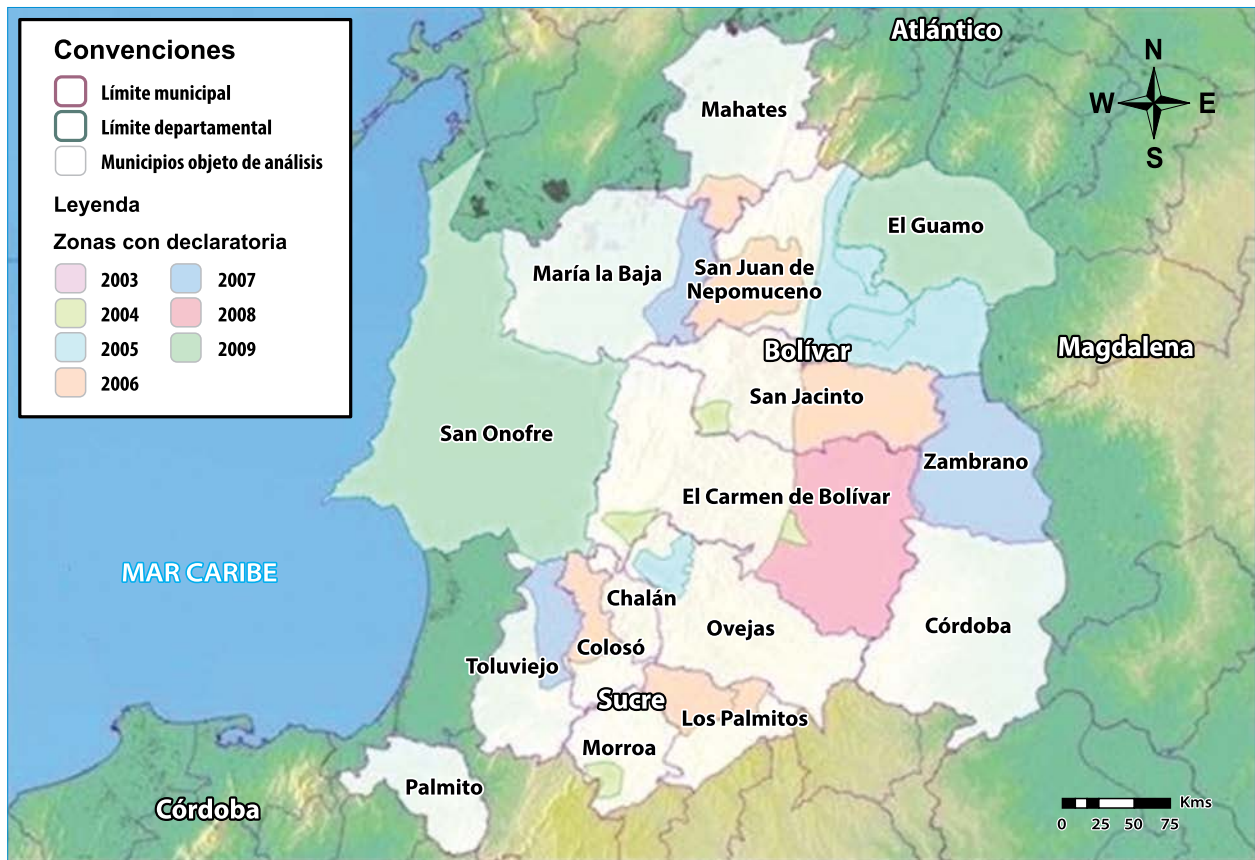
Fuente: OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Mapa 4
Sur de Córdoba



Fuente: Cartografía: DANE. Georreferenciado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

Mapa 5
Montes de María



Fuente: <https://alchetron.com/Montes-de-Mar%C3%ADA#montes-de-mara-d466a221-f24a-4597-bbb7-4cb9d6c867b-resize-750.jpeg>

ANEXO 2

TABLAS

Tabla 1

Evolución histórica de los grupos armados liderados por los Giraldo en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta

	Etapas 1, 1976-1982	Etapas 2, 1983-1994	Etapas 3, 1995-2000	Etapas 4, 2001-2006	Etapas 5, 2007/2020-2023
Denominación	Los Chamizos.	Autodefensas del Mamey.	Conservar Limitada / Auto-defensas Campesinas del Magdalena y La Guajira.	Frente Resistencia Tayrona.	Oficina Caribe / Los Pachencia / Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Carácter	Grupo de seguridad privada.	Contra insurgente/ criminal.	Contra insurgente/criminal.	Contra insurgente/ criminal.	Grupo criminal en proceso de politización.
Bienes y servicios ofertados	Oferta de seguridad a los campesinos y comerciantes de Santa Marta y la Sierra Nevada. Creación de rutas seguras para el contrabando hacia las Antillas.	Protección a los cultivos de marihuana y luego a los de coca. Oferta de servicios logísticos y de seguridad a cargamentos de cocaína de narcotraficantes locales y de otras regiones del país. Oferta de seguridad a los campesinos y comerciantes de Santa Marta y la Sierra Nevada. Control electoral por medio de la eliminación o amedrentamiento de nuevos actores políticos.	Oferta de servicios de seguridad en el sector del mercado público de Santa Marta, en barrios y en otros gremios del comercio de la ciudad como transportadores, hoteleros y comerciantes en general. Oferta de servicios logísticos y de seguridad a cargamentos de cocaína de narcotraficantes locales y de otras regiones del país. Control electoral por medio de la eliminación o amedrentamiento de nuevos actores políticos y el apoyo a candidatos específicos por medio de proselitismo armado.	Oferta de servicios de seguridad en el sector del mercado público de Santa Marta, en barrios y en otros gremios del comercio de la ciudad como transportadores, hoteleros, agroindustriales y comerciantes en general. Oferta de servicios logísticos y de seguridad a cargamentos de cocaína de narcotraficantes locales y de otras regiones del país. Control electoral por medio de la eliminación o amedrentamiento de nuevos actores políticos y el apoyo a candidatos específicos por medio de proselitismo armado.	Oferta de seguridad a los comerciantes, agroindustriales y operadores turísticos de la troncal del Caribe. Oferta de servicios logísticos y de seguridad a cargamentos de cocaína de narcotraficantes locales y de otras regiones del país.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2**Presencia de las AGC en el Caribe colombiano**

Departamento	Bloque (estructura)	Frentes (subestructura)
La Guajira	Nelson Darío Hurtado	David Mesa Peña Erlin Pino Duarte Francisco José Morelos
Cesar		Diomedes Dionisio Ortega Ramos Francisco José Morelos
Magdalena		Diomedes Dionisio Ortega Ramos Erlin Pino Duarte
Bolívar	Roberto Vargas y Aristides Mesa Páez	Erlin Pino Duarte Julio César Vargas Héroes del Caribe Édgar Madrid Benjumea Luis Alfonso Echavarría
Atlántico	Aristides Mesa Páez	Nicolás Antonio Urango Reyes Manuel José Gaitán
Sucre		Manuel José Gaitán Luis Fernando Gutiérrez Francisco José Morelos Uldar Cardona Rueda
Córdoba	Central Urabá y Pacificadores de Córdoba	Rubén Darío Ávila Zuley Guerra Javier Yépez Cantero Rubén Darío Ávila Uldar Cardona Rueda Juan de Dios Úsuga

Fuente: autoría propia con información de prensa y de Carlos Guerrero.

Tabla 3**Presencia de las ACSN en el Caribe colombiano**

Departamento	Municipios
Magdalena	Ciénaga Santa Marta
La Guajira	Riohacha Dibulla
Cesar	Valledupar

Fuente: autoría propia con información de prensa.

Anexo 4**Presencia del ELN en el Caribe colombiano**

Departamento	Municipios	Frente de guerra	Frentes y compañías guerrilleras
Bolívar	San Pablo	Darío de Jesús Ramírez Castro	Édgar Amílkar Grimaldo Barón
	Cantagallo		Luis José Solano Sepúlveda
	Simití		Héroes y Mártires de Santa Rosa
	Norosí		Alfredo Gómez Quiñonez
	Morales		Guillermo Ariza
	Arenal		Compañía Simón Bolívar
	Santa Rosa del Sur		
Cesar	Aguachica	Nororiental	Camilo Torres Restrepo Compañía Capitán Francisco Bosio
	Curumaní		
	Gamarra		
	González		
	La Gloria		
	Pailitas		
	Pelaya		
	Río de Oro		
	San Martín		
	San Alberto		
	Tamalameque		
La Guajira	Maicao	El frente de guerra Norte del ELN José Manuel Martínez Quiroz, tiene su base operaciones en el estado Zulia de Venezuela y desde ese territorio incursiona en las áreas rurales de los municipios de Cesar y La Guajira antes señalados	Luciano Ariza
	Barrancas		
	Fonseca		
	El Molino		
Cesar	Villanueva		Compañía Óscar Enrique Sánchez Caicedo
	Manaure		
	San Diego		
	Codazzi		
Atlántico	Becerril		
	Barranquilla	Responde al frente de Guerra Urbano	Kaleb Gómez Padrón

Fuente: autoría propia con información de prensa y de Carlos Guerrero.

Anexo 5**Presencia del EMC en el Caribe colombiano**

Departamento	Municipios	Frentes
Bolívar	San Pablo	4, 24 y 37
	Cantagallo	
	Simití	
	Norosí	
	Morales	
	Arenal	

Fuente: autoría propia con información de prensa.

ACERCA DE LOS AUTORES

Luis Fernando Trejos. Profesor-investigador del departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad del Norte (Barranquilla). Coordinador de la agenda de investigación UNCaribe de la Universidad del Norte.

Reynell Badillo Sarmiento. Estudiante doctoral en la Universidad de Chicago e Investigador de la agenda UNCaribe.

PIE DE IMPRENTA

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Calle 71 n° 11-90 | Bogotá-Colombia

Responsable

Oliver Dalichau
Representante de la FES Colombia

Saruy Tolosa
Coordinador de proyectos
saruy.tolosa@fes.de

Bogotá, febrero de 2024

SOBRE ESTE PROYECTO

Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de re-

flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos *policy papers*, análisis temáticos y libros.

Para más información, consulte

<https://colombia.fes.de>

El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES.

LA PAZ TOTAL EN EL CARIBE: GOBERNANZAS ARMADAS Y POLITIZACIÓN ACELERADA DEL CRIMEN ORGANIZADO



Este artículo examina los efectos que la política de Paz total del Gobierno de Gustavo Petro ha tenido en territorios en conflicto armado en el Caribe colombiano. En lugar de observar las tendencias en indicadores comúnmente analizados (homicidios, desplazamientos o confinamientos, por ejemplo), se centra en la estructura de incentivos que la Paz total generó y en cómo los grupos armados podrían estar respondiendo en la región.

En este sentido, propone no leer los indicadores de violencia de forma unitaria, sino a partir de tres direcciones: ascendente (entre Estado y grupos armados), descendente (grupos armados contra civiles) y horizontal (entre grupos armados no estatales). Esta forma de entender la violencia derivada del conflicto permite complejizar lecturas que, al mostrar una reducción de algunos indicadores, concluyen que entonces *la violencia*, en general, se ha reducido.



Desde esta lógica, la Paz total ha sido útil para reducir la violencia ascendente y, en consecuencia, algunos indicadores de violencia descendente, usualmente resultados de la primera. No obstante, sostenemos que ha incentivado también otros fenómenos: la violencia horizontal, las gobernanzas armadas y la politización de los grupos armados.

Con respecto a la primera, el análisis muestra cómo los grupos armados en el Caribe colombiano están aprovechando no tener que enfrentarse al Estado para expandir sus zonas de control territorial y retar el dominio de otros actores. Los casos de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y el sur del Cesar ilustran cómo la falta de violencia vertical ha tenido poco impacto en la violencia horizontal que estos grupos están ejerciendo. Sin embargo, esta parece ser una tendencia extrapolable al ámbito nacional.